

Contener y aislar a los violentos



En blanco y negro

Juan Lozano

Alguna extraña alteración de las dinámicas sociales está impidiendo diferenciar entre el legítimo diálogo con quienes quieren tramitar pacíficamente sus propuestas, inconformidades o proyectos y quienes acuden criminalmente al vandalismo, a la violencia o a las vías de hecho. No. No son lo mismo, ni pueden confundirse ni pueden recibir el mismo tratamiento. La sensibilidad y la disposición para un diálogo respetuoso no pueden derivar en la calle en la anarquía, la violencia, el desabastecimiento y la muerte en noches y días de terror.

Un gobierno con sensibilidad social no puede ser sinónimo de un gobierno débil que tolere la violencia y la anarquía callejera, como pretenden algunos. Una sociedad que clama para que no haya excesos de fuerza policial debe clamar también para que se respeten la vida y la integridad de policías y soldados. Los diálogos deben avanzar y las vías de hecho deben cesar de inmediato.

Muchos funcionarios de las distintas ramas han sido desgastados para el diálogo social. A esos funcionarios les gusta el diálogo entre pares, con los poderosos, así sean congresistas o comandantes guerrilleros, pero les cuesta trabajo el diálogo popular, paciente, metódico, respetuoso, constante.

Por lo general, esos funcionarios viven de afán y la cuerda para el diálogo popular les alcanza hasta que los reporteros de los noticieros tienen prendidas las cámaras. Cuando las apagan, ellos también se van y dejan a la gente viendo un chispero, en manos de funcionarios sin ninguna capacidad de acción o decisión. La parte que les gusta del diálogo popular es cuando ellos hablan, pero parece que les atacara la piquiña cuando se trata de oír a la gente.

Cuando algún modesto ciudadano hace un reclamo, contestan enrostrándole algún proyecto oficial, que casi nunca funciona, y repitiendo una retahíla de frases de cajón que nada resuelven para que un coro de áulicos aplauda al doctor o a la doctora.

El Estado social de derecho ha de ser un Estado dialogante, respetuoso de las ideas ajenas y de la diferencia. Debe concertar proyectos sociales, políticas públicas y planes de inversión. Debe oír la voz de los marginados y los desposeídos. Debe oír la voz de la clase media. Debe oír la voz de los dirigentes. Debe oír a los estudiantes y a los pensionados. A los empresarios y a los trabajadores. A los grandes industriales y a los microempresarios. Debe oírlos a todos.

Con arrogancia tecnocrática, han dicho que el país está sobrediagnosticado. Mentira. Lo que ha ocurrido estos días comprueba lo mal que entienden las élites burocráticas a los colombianos y la necesidad de remontar esa peligrosa falta de sintonía.

Dicho eso, es necesario advertir que otra cosa muy distinta, que no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con el pluralismo ni con el derecho a la protesta pacífica, son las vías de hecho, el vandalismo y la afectación criminal a las comunidades desarmadas que quieren seguir trabajando honradamente y viviendo tranquilamente su vida.

Todo el respeto para el diálogo social, todas las garantías para la protesta pacífica y toda la firmeza, la fortaleza y la contundencia de las fuerzas legítimas del Estado contra los violentos. Con la misma voz

firme con la que se reclaman las garantías para los manifestantes pacíficos, con la misma claridad con la que se pide castigar los excesos de fuerza, se debe pedir que se capturen, procesen y condenen todos los violentos, los que destruyen, bloquean, agreden, rompen, matan. Vengan de donde vengan.

Mientras tanto, el país anda calibrando el talante de quienes aspiran a gobernarnos. Las actitudes de estos días valdrán más que mil discursos. Ante esta crisis gigantesca, estamos pudiendo ver quién es quién, cómo entienden la democracia, la solidaridad, las responsabilidades de Estado y el ejercicio del poder. Que no vengan luego a pedir nuestros votos quienes no lograron estar a la altura de las circunstancias.